

Una más de Odebrecht

Colocada en el limbo la propuesta de la constructora brasileña Odebrecht de canjear con una aportación económica la posibilidad de borrón y cuenta nueva para poder seguir recibiendo contratos, aparece en escena otro soborno no contemplado en el expediente, éste con proa al gobierno de Michoacán. El ilícito está asociado a un contrato para diversas obras hidráulicas en la presa “Francisco J. Mújica”, pactado durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel y concluido en la gestión de Leonel Godoy Rangel.

El costo inicial de la sobras en tierra caliente era de mil 500 millones de pesos, elevándose a 2 mil 918. El pacto, a su vez, hablaba de una ruta crítica de noviembre de 2006 a 2008... con la novedad de que las obras se entregaron al inicio de 2013. Desfase, pues, de cinco años. El hecho, de acuerdo con una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, es que la policía del Principado de Andorra descubrió depósitos de la instancia utilizada por Odebrecht para canalizar recursos hacia gobiernos de América Latina, a nombre de Víctor Guerra Reyes.

Este, como director de Estructuras Hidráulicas en los gobiernos de Cárdenas y Godoy, era el responsable de los contratos. La cuenta se abrió el 28 de abril de 2008 en un banco del paraíso fiscal al que colocaron depósitos desde Estados Unidos y Brasil de entre 100 y 150 mil dólares. Semanas después de la apertura de la cuenta, el 2 de junio de 2008 se recibió el primer envío por parte de Klienfeld Services por 50 dólares, que se transfirieron al Caixabank de Barcelona en una cuenta a nombre de un pariente de Guerra Reyes.

Estamos hablando ya del gobierno de Leonel Godoy y del desfase en la entrega de las obras. Para abrir la cuenta en el paraíso fiscal, Guerra Reyes se ostentó como socio mayoritario de la unión de productores de frutas La Selecta, ubicando su sede en la comunidad de Jeráhuaro, municipio de Zinapécuaro, aduciendo que había sido director de la empresa de ingeniería Tecuen Proyectos y Supervisión. En febrero de 2010 la propia firma offshore de Odebrecht reportó otros dos pagos por 383 mil dólares, vinculados con la misma obra.

Los documentos de la policía de Andorra no mencionan ni a Cárdenas ni a Godoy, aunque hablan de una “comisión” por obras realizadas. De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en el expediente aparecen extractos de dos investigaciones realizadas por ésta en que se mencionan múltiples irregularidades en la construcción de las obras. El caso es que Víctor Guerra Reyes es en la actualidad socio de Fernando Antonio Costa Martins quien fuera director de proyectos de Odebrecht en Brasil, Perú, Venezuela y México.

En conjunto crearon una empresa de razón social Estructuración y Desarrollo de Proyectos de Infraestructura (Edpisa), a la que se agregó Carlos Roberto Terra,

quien a su vez fuera gerente de ingeniería en las obras de la presa y en las del complejo Etileno XXI, cuyo contrato se llevó Braskem, filial de Odebrecht, en sociedad con Idesa. Costa Martins fue el que firmó el contrato con el gobierno michoacano y quien posteriormente negoció ampliaciones en el pago, alegando inconsistencias en el proyecto. La posibilidad de un pacto de Odebrecht con el gobierno de México la dejaron en el limbo diversas declaraciones de funcionarios del nuevo gobierno de que no habría contratos para la constructora brasileña.

Balance general. En el marco de México Cumbre de Negocios, que se celebra en Guadalajara el magnate Carlos Slim reiteró sus propuestas de reducir las jornadas laborales a tres días a la semana y ampliar la posibilidad de jubilación a los 75 años. La exposición de motivos habla de que en la fórmula se puede duplicar el número de empleos en un escenario en que la tecnificación acota día a día el número de plazas. A manera de ejemplo, el presidente honorario vitalicio del Grupo Carso señaló que a la llegada del tractor, 22 veces más productivo que el arado, se redujo notablemente la mano de obra en el campo. El desplazamiento se intensifica en el sector financiero, jurídico y médico. De acuerdo con ello, muchos países no están en opción de atender jubilaciones en el escenario actual de 65 años. Hoy estará en el evento el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y ayer estuvo a su vez el actual, Enrique Peña Nieto.

COLUMNA DE ENRIQUE CAMPOS SUAREZ. Octubre 23 del 2018
--

El final de la tersa transición

No hay que olvidar que a Andrés Manuel López Obrador, durante todo lo que va del siglo, sus opositores políticos lo vendieron como un peligro para México, cada campaña se incrementaba el número de calificativos negativos en contra del que, finalmente, ganó las elecciones en julio pasado. La transición ha sido calificada como de terciopelo, porque los que se van reconocieron su derrota y los que llegan mostraron una enorme prudencia al momento de aterrizar el discurso de campaña a la realidad. Pero eso se ha borrado con el paso de las semanas y a estas alturas, el gobierno que tomará posesión dentro de menos de 40 días parece no tener ganas de desmentir a los que lo acusaban de poner en riesgo la estabilidad.

El ejercicio partidista al que han llamado consulta ciudadana para interrumpir la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México pasó de un tema de arena electoral a ser un daño auto infringido por parte del gobierno electo que habrá de tener consecuencias necesariamente. Es la confianza la que se ve trastocada con este hecho, incluso si “ganara” la opción de Texcoco en la consulta, quedaría la duda de la firmeza de las decisiones del gobierno que viene.

Y ahora el enfrentamiento con las firmas calificadoras. Esas empresas del sector financiero que se dedican a evaluar la posibilidad de que un emisor de deuda pueda ser capaz de cumplir sus compromisos están acostumbradas a las andanadas de los calificados. Si no que le pregunten a Standard and Poor's cuando se atrevió a

degradar la calificación de la deuda estadounidense tras la Gran Recesión y el Departamento de Justicia los llevó a un juicio millonario.

Moody's que cuestionó la viabilidad de dejar de exportar petróleo crudo, como lo adelantó el propio López Obrador, y sobre todo Fitch Ratings, que puso en perspectiva Negativa las calificaciones crediticias de Petróleos Mexicanos, han recibido la andanada de los que vienen a gobernar. Absurdos e incongruentes, son tan sólo un par de adjetivos endilgados por el propio López Obrador y su equipo más cercano, como si se tratara de un complot internacional, una campaña de los mercados, dice el propio vocero del presidente electo, para afectar la cuarta transformación. Ya hay efectos financieros de estos traspiés del gobierno que viene. La depreciación del peso frente al dólar es directamente adjudicable a estos episodios de abono a la desconfianza.

Lo que era una transición pacífica de acercamiento con los sectores productivos se ha convertido en un desencuentro con los empresarios, los medios y no pocos analistas que advierten los peligros de radicalizarse en el manejo financiero. Si el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador no cambia el tono de sus posturas en temas tan trascendentes como el aeropuerto, Pemex y el manejo financiero, se acabó la tersa transición y las semanas que quedan antes del ascenso al poder serán de más inestabilidad.

Y ni hablar de cuando asuman el poder y puedan tomar decisiones de gobierno, mandar iniciativas de ley que lleguen a un Congreso donde no hay resistencia opositora y el diseño de un paquete económico que ponga en blanco y negro todos sus planes financieros. ecampos@economista.com.mx